

Empresarios rurales y acción política en Argentina¹

Carla Gras

Resumen

Este artículo analiza el papel del empresariado rural en la Argentina contemporánea, sector que evidencia importantes cambios. Se aborda la relación entre la reconfiguración de los perfiles empresariales y las transformaciones en sus identidades y formas organizativas, así como sus implicancias en términos de sus modalidades de presencia en la vida pública y política, demandas y formas de acción. Ello ocurre en un contexto que conjuga un fuerte crecimiento de la producción y las ganancias de estos grupos con un creciente posicionamiento de sus organizaciones y voceros en el escenario político, logrando en los últimos años ubicarse en lugares centrales del mismo y aglutinar a la oposición político-partidaria. Tomaremos como caso de análisis el conflicto suscitado entre los productores agrarios y el gobierno de Cristina Kirchner durante 2008 por la política de derechos a las exportaciones (retenciones).

Palabras clave: empresariado rural, corporaciones agrarias, instituciones socio-técnicas, conflicto agrario.

Abstract

Rural entrepreneurs and political action in Argentina

This article examines the role of rural entrepreneurs in contemporary Argentina, a group showing significant changes. The relationship between the reconfiguration of business profiles and the transformation of entrepreneurs' identities and organizational forms is discussed, as well as its implications in terms of entrepreneurs' modes of

¹ Este artículo fue escrito en el marco de una estadia de investigación realizada entre enero y febrero de 2011 en el Lateinamerika Institut, Freie Universität Berlin y el Ibero-Amerikanisches Institut, financiada con una beca de la Fundación A. von Humboldt.

presence in political and public life, their claims and forms of action. This occurs in a context where strong production growth and skyrocketing profits for these groups elicit an enhanced positioning of their organizations and spokespeople on the political stage, securing in recent years central political platforms, and galvanizing both political and partisan opposition. The argument is focused on the 2008 dispute between agricultural producers and Cristina Kirchner's administration over export tax policies.

Key words: rural entrepreneurship, agrarian corporations, socio-technical institutions, agrarian conflict.

Introducción

Las ciencias sociales en Argentina ofrecen una cartografía pormenorizada de las mutaciones de su estructura social y de las identidades sociales y políticas de distintos actores en las últimas décadas. En esa cartografía, el estudio de las transformaciones ocurridas entre los sectores económica y socialmente predominantes ha ocupado un lugar relativamente menor en comparación con el abordaje de las clases populares y medias. Al mismo tiempo, se observa la persistencia de ciertos supuestos referidos a la coherencia entre los intereses de estos sectores y su posición económica, y al papel excluyente que sus intereses económicos tienen en sus formas de organización y presencia en la vida pública y política.

En el caso del empresariado rural, en particular sus estratos más concentrados, estos supuestos asumen formas bien precisas. Así, se da por descontada la relación entre su liberalismo económico, su oposición acérrima a toda forma de regulación o posicionamiento por parte del Estado frente a las condiciones que sustentan su dinámica de acumulación, y sus formas de organización y presión en el espacio público. Asimismo, se presume su naturaleza anti-democrática tanto en lo que refiere a sus valores y creencias políticas como al tipo de arreglos institucionales que propician para defender sus intereses. Con las reformas de mercado de los años noventa y el desarrollo de un nuevo patrón socio-productivo en el agro —que impulsó una mayor concentración de la tierra y la producción y mayores necesidades de capital— la pregunta sobre cómo el poderío económico de los sectores beneficiados se reflejaba en la política pública pareció perder relevancia, al darse por supuesto que esa traducción operaba sin fallas.

Nos proponemos dialogar con estas asunciones, interrogándonos por los comportamientos políticos de los empresarios rurales en la Argentina contemporánea. La importancia de este interrogante no puede entenderse a cabalidad sin considerar la configuración histórica del sector agropecuario

—particularmente de la producción pampeana para el mercado mundial— y de sus actores principales, y los cambios operados a lo largo del pasado siglo, en especial en su última década. Ese recorrido, que se esboza brevemente en el primer apartado, permitirá situar los interrogantes centrales de este trabajo referidos a las formas en que el desarrollo de nuevas tramas productivas en el agro argentino se tradujo en las identidades colectivas, las demandas y las formas de acción política del empresariado agrario.

Cabe señalar que, aun reconociendo las profundas mutaciones que el sector agropecuario atravesó en las últimas décadas y sus impactos en la estructura agraria, algunos análisis insisten en una suerte de eterna presencia de la vieja clase terrateniente que caracterizó al modelo agroexportador de fines del siglo XIX, que mantendría su otrora fuerte entidad corporativa (la Sociedad Rural Argentina, fundada en 1866) y su ejercicio de influencia política. Esta consideración merece ser interrogada. Pero al mismo tiempo, tampoco podría sostenerse que los cambios sucedidos en los últimos años dan cuenta por sí solos de los comportamientos aquí analizados, como sugieren los análisis que enfatizan los puntos de ruptura entre las antiguas clases empresariales y los nuevos perfiles que ellas presentan en la actualidad. En ese contexto, retomar elementos del largo plazo permite una mejor aproximación a las continuidades y rupturas que conlleva la emergencia de un nuevo modelo agropecuario en la construcción de campos de poder de sus actores centrales.

Desde mediados del siglo XIX, el peso económico, social y político de este sector productivo ha sido fundamental en la historia nacional. Si bien la contribución de la producción agropecuaria a la economía nacional ha conocido distintos momentos, cabe destacar su dinámica de crecimiento en las últimas dos décadas, proceso asociado al cambio técnico y a la biotecnología. Desde distintos enfoques disciplinarios, numerosos estudios han analizado la relación entre la expansión de cultivos transgénicos —con sus impactos en la organización y gestión de los procesos de trabajo, las demandas de capital y conocimientos— y los profundos cambios en la estructura productiva y social del agro argentino. En otros trabajos, hemos subrayado cómo ese patrón tecnológico demandó nuevos modos de entender y practicar la actividad agropecuaria, favoreciendo el ingreso de nuevos actores, obligando a otros a cambiar sus prácticas, y expulsando a un número no menor de otros (Gras y Hernández, 2008). Interesa aquí detenerse en las transformaciones operadas al interior del sector empresarial, en particular la emergencia y consolidación de un nuevo tipo de empresariado —a diferencia de las antiguas clases propietarias, más comprometido con la gestión y conducción de sus empresas—, proceso vinculado, entre otros factores, a cambios en sus estructuras

técnico-productivas y en sus formas de acumulación y capitalización.

Menos se conoce sobre la medida en que esos cambios se expresan en los comportamientos políticos del empresariado. Como sostendremos, la construcción de sí mismos como un nuevo tipo de empresariado —en particular a partir de la importancia que entre ellos han adquirido nuevas formas de organización— redefinió el peso simbólico de antiguas adscripciones identitarias (sus representaciones, ideas y creencias respecto de lo que son) y los modos de entender su rol en la sociedad más amplia, proceso que no puede comprenderse acabadamente sin considerar la dimensión material de dicha reconfiguración. Más precisamente, nuestra hipótesis es que el cambio técnico ha sido un vehículo fundamental de transformaciones en sus identidades y que ello tiene consecuencias en sus modalidades de presencia en la vida pública y política, demandas y formas de acción.

Estas preocupaciones cobran relevancia en el contexto actual gracias a la conjunción de varios factores. Uno de los más importantes y quizás menos problematizado, como señalamos, refiere a la recomposición del propio empresariado. Un segundo factor es la complejización de las formas de representación de intereses² donde las organizaciones tradicionales de carácter gremial³ coexisten con asociaciones profesionales.⁴ Estas últimas conforman

² Tomamos aquí la idea de interés en el sentido que lo hacen los análisis que desde la economía política (Hall, 1997) abordan el tema de la acción empresaria, esto es, como los intereses reales y materiales de los actores productivos. Éstos, sin embargo, no resultan del mero reflejo de una posición en el sistema productivo; “no son estáticos sino que, por el contrario, se construyen en la práctica al tiempo que son producto de la historia y de las múltiples interacciones en que los empresarios participan” (Beltrán, 2007:27). Autores como Offe (1988) y Schmitter (1992) analizan la representación corporativa de esos intereses, es decir, la representación funcional, paralela a la electoral, de estos actores para interactuar con el Estado e influir en la orientación de la política pública. Estas formas corporativas cumplen un papel fundamental en la construcción de las preferencias empresarias, elemento central en los modos que asume la agregación colectiva de los intereses en cada momento histórico.

³ En el caso del agro argentino, se observa la organización temprana de los actores productivos en entidades recortadas sobre clivajes de clase —la Federación Agraria, agrupaba a los pequeños arrendatarios; la Sociedad Rural Argentina a los grandes terratenientes pampeanos, la Confederación Rural Argentina a un sector de los terratenientes pampeanos enfrentados a los criadores ganaderos— y su conformación en el tiempo como entidades de defensa y negociación de intereses sectoriales. Su interlocutor fundamental ha sido el Estado. Desde una perspectiva clásica, podríamos plantear que el tipo de solidaridades implicadas en la representación ejercida por estas entidades —que llamamos “tradicionales” para distinguirlas de las de nuevo tipo— es de tipo mecánico, resultante de la relativa homogeneidad del grupo.

⁴ En las últimas décadas se observa el surgimiento de las denominadas “asociaciones profesionales”, para retomar la categoría nativa. Se trata de organizaciones cuyo propósito explícito no es la representación de intereses sino la producción y circulación de conocimientos técnicos para la práctica empresarial en diversos ámbitos (la producción, la gestión económica

verdaderas traductoras de los valores e ideas respecto de las bondades del cambio técnico, y del nuevo tipo empresarial que el mismo requiere, constituyéndose en nexos que permiten articular comportamientos productivos, económicos, sociales y políticos de maneras significativas para los actores. Además, muchas veces han logrado concitar mayor adhesión entre los empresarios que las entidades que históricamente se arrogaron su representación. Nos interesa en ese contexto, explorar aquí las modalidades que asume la presencia de los empresarios en la vida pública y política en el periodo reciente, el cual conjuga un fuerte crecimiento de la producción y las ganancias de estos grupos, con un creciente posicionamiento de sus organizaciones y voceros en el escenario político, logrando en los últimos años —durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner— ubicarse en lugares centrales del mismo. Así, importará considerar la producción de ideas y nociones que movilizan su accionar y moldean el modo en que perciben sus intereses y su posición en la sociedad. Para ello, tomaremos como caso de análisis el conflicto suscitado entre los productores y el gobierno de Cristina Kirchner durante 2008 por la política de derechos a las exportaciones. Como observamos en nuestra investigación,⁵ éste fue un momento de debate político al interior del empresariado en el que se (re)construyeron núcleos de sentido respecto de su papel en el sector agropecuario y, en la sociedad más amplia, su relación con los sectores subordinados (agrarios y no agrarios), y con el Estado. Sostendremos que en el marco del conflicto se pusieron en juego estas otras dimensiones, además de la presión corporativa, en torno a una medida desfavorable para el sector agropecuario —que perjudicaba sus niveles de ganancia— y se planteó la necesidad de darle a ello una expresión política.

y financiera, la comercialización, la adaptación de innovaciones tecnológicas). Dos de las más significativas son AACREA (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola) y AAPRESID (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa). Bajo la impronta técnica, estas entidades abandonan las referencias políticas explícitas y la defensa “gremial” que invocan las corporaciones, y construyen un perfil experto. En este caso, más que representar intereses en el sentido asociado convencionalmente a las corporaciones empresarias, estas entidades ofrecen —desde la pureza ideológica que reclama la norma tecno-científica (Habermas, 1984)— marcos interpretativos comunes para la acción empresarial. En ese sentido, configuran redes específicas de acumulación de poder económico y técnico (Pucciarelli, 2002). Las solidaridades entre sus integrantes son de tipo orgánico, esto es, resultado principalmente de la interacción entre sus miembros.

⁵ En el marco de mi investigación actual (“Dinámicas sociales y políticas en el nuevo escenario agrario: actores, prácticas institucionales y representaciones ideológicas”), he trabajado sobre la conformación del empresariado rural vinculado a la expansión sojera. Mi abordaje es el de estudios de caso, utilizando encuestas, entrevistas, documentos institucionales, material periodístico y el registro de sus distintos espacios de interacción. Mi trabajo ha recibido financiamiento de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica.

El agro argentino y sus actores principales

Desde mediados del siglo XIX la dinámica del agro estuvo entrelazada con la posición dominante de un conjunto de grandes terratenientes capitalistas asentados en la región pampeana, principal productora de los bienes exportables (carne y cereales) que el país producía. El lugar de privilegio de estos grupos no sólo se sustentaba en la propiedad de grandes volúmenes de tierra y control de la renta agraria, sino también en su dinamismo empresarial y el carácter innovador de sus métodos de producción (señalado, entre otros autores, por J. Sábato (1988) en su clásico estudio). Pero además, estos grupos ostentaron el poder político, desarrollando una influencia determinante en los asuntos e instituciones públicas por lo menos hasta la primera década del siglo XX. Lazos sociales y familiares comunes, estilos de vida semejantes, les fueron dando una particular cohesión y consistencia interna. Aún cuando los grandes propietarios también tuvieron inversiones importantes en otros sectores de la economía (como las finanzas, el comercio de exportación o incluso la industria), su auto percepción como grupo superior y privilegiado se sostenía centralmente en su condición de terratenientes y empresarios agropecuarios (Hora, 2005). En consonancia con ello, desplegaron una visión común sobre la Argentina como un país agrario, sobre la cual la nación se desarrollaría y participaría de una economía mundial en expansión.

La crisis mundial de 1929 introdujo inflexiones importantes en el modelo económico, iniciándose un proceso de sustitución de importaciones que complejizaron la morfología social y política del país. Si bien las bases económicas y productivas de la posición de estos terratenientes no se transformaron sustantivamente —la gran propiedad seguía dominando el escenario pampeano—, estos grupos comenzaron a encontrar problemas crecientes para ejercer poder político, lo que, plantea Hora (2009), se debía en buena medida a sus dificultades para construir organizaciones representativas de los intereses del conjunto de los terratenientes.⁶

Con la profundización del proceso industrializador, su poder fue debilitándose, tanto por la importancia que cobraron los sectores industriales —los cuales pasaron a ser el motor principal del crecimiento económico—, como por la consolidación de pequeños y medianos agricultores, beneficia-

⁶ Es importante subrayar los procesos de diferenciación interna que alcanzaban a los terratenientes, en función de factores como su escala productiva, su relación con el capital extranjero, su inserción en otros sectores de la economía, el segmento del mercado externo al que destinaban sus productos principales, etc. Un excelente análisis de este proceso es el clásico estudio de Murmis y Portantiero (1971).

dos por políticas de acceso a la propiedad de la tierra y al crédito durante el primer peronismo. Desde 1943 en adelante, con la sanción de la ley de arrendamiento,⁷ la estructura de propiedad en el agro argentino sufrió importantes transformaciones, cayendo el peso de la superficie arrendada, y haciéndose más heterogéneo el espectro de los propietarios, en términos de su origen social y de la extensión de sus propiedades. Hora (2005) ubica estos años como el fin del poder terrateniente, dada la pérdida de centralidad de la gran propiedad en sus manos, y señalando que a partir de entonces las grandes fortunas del país ya no estaban asentadas en la tierra.

No obstante, los grandes productores retendrían una cuota no menor de poder al controlar el principal canal de obtención de divisas del país, el que a su vez jugaba un rol sustantivo en el proceso de industrialización. Como señaló O'Donnell (1977): aún cuando los grandes productores ya no fueran el pivote central del capitalismo argentino, tenían la capacidad de defenderse de cualquier intento de reestructurarlo⁸ así como de lograr transferencias de ingreso en su beneficio. La vigencia del modelo de industrialización sustitutiva (hasta los años setenta) fue también la etapa del llamado “estancamiento pampeano”, caracterizado por la pérdida de dinamismo o retroceso de la producción de granos y de la ganadería vacuna⁹ (Obschatko, 2003). Durante estos años, la agricultura de empresas medianas logró consolidarse y coexistir con la gran empresa; proceso en buena medida relacionado con las políticas de precios del periodo, las cuales desestimularon la entrada de grandes capitales a la producción agraria directa¹⁰ que presionaran sobre la pequeña y mediana empresa. Por otra parte, la tierra seguía siendo un recurso abundante, lo que combinado con la incorporación tecnológica —mecanización de labores, introducción de insumos industriales— permitieron mantener dicha coexistencia (Giarracca, Gras y Barbeta, 2005).

⁷ La ley 13.246 dictada en 1948 establecía un plazo mínimo de 3 años para los contratos de arrendamiento, y establecía una serie de medidas que regulaban la relación entre terrateniente y arrendatario. Asimismo, garantizaba la continuidad del contrato en caso de la muerte de este último, por parte de sus descendientes o ascendientes.

⁸ Por ejemplo, el intento en 1973 de sancionar un impuesto a la renta normal potencial de la tierra.

⁹ Los debates políticos y académicos sobre esa etapa incorporaban factores tales como el comportamiento de los niveles de inversión y rentabilidad, su relación con las políticas de transferencia de la renta agropecuaria a otros sectores de la economía, así como también el carácter de las elites agropecuarias, en especial de los grandes ganaderos, visualizados por una parte significativa de la literatura como una clase oligárquica que vivía de la renta derivada de su control sobre la tierra.

¹⁰ No así en la etapa de comercialización o procesamiento de las materias primas agrarias, proceso especialmente relevante en las actividades ligadas al mercado interno.

Hacia la década de 1980, el agro comienza un proceso de cambio que le devolvería su rol protagónico en la economía argentina. Un elemento destacado en la evolución positiva de la producción y la productividad fue la profundización del cambio tecnológico, que se consolida con la expansión de la biotecnología en la segunda mitad de los años noventa. Ello tuvo impactos en el patrón productivo: se fortalece la llamada agriculturización que implicó el creciente abandono de la ganadería y la expansión de fronteras agrarias; en la producción agrícola adquieren peso excluyente los granos, especialmente la soja transgénica, con un crecimiento exponencial.¹¹ A diferencia de la carne y el trigo que se destinaron históricamente tanto al mercado mundial como al doméstico, la soja se exporta casi en su totalidad. Su expansión es inseparable de la entrada de grandes capitales, orientados tanto al procesamiento industrial y la provisión de insumos, como a la compra de tierras.

La utilización de un nuevo paquete tecnológico¹² impulsó la intensificación en el uso del capital, modificando los umbrales mínimos para sostenerse en la producción. Así, durante toda la década de 1990 se registró un incremento sostenido del tamaño mínimo para una explotación rentable —acompañado de la concentración de la producción—, proceso en el que también incidió la política macroeconómica, modificando drásticamente la estructura de costos de las empresas.¹³ Estos cambios afectaron tanto a los

¹¹ En 1990 la superficie con soja rondaba los 5 millones de hectáreas, alcanzando 7 millones en 1997. Entre ese último año y 2009 la superficie sembrada con soja más que se duplicó, alcanzando 18 millones de hectáreas. La producción tuvo un crecimiento aún más intenso, pasando de 18 732 172 toneladas en 1997 a cerca de 47 millones y medio en 2007. Las dos campañas siguientes registran caídas en la producción, como consecuencia, entre otros factores, de la sequía. En la campaña 2009, la producción fue de casi 31 millones de toneladas (Estimaciones Agrícolas, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación). Para la actual campaña, las estimaciones privadas van desde los 35 millones de toneladas a 48, según se comporten los regímenes de lluvia (<http://www.redcrea.org.ar/aacrea/site/PortalInstitucional-internet/kbee:/aacrea/content/portalcontent/taxonomia-recursos/entidades/grupos-trabajos/portalinstitucional/219ccf00-1e95-11e0-815e-001517dee58c/35809988-ce83-4217-b1bb-6fb93a17d2d7.documento/229-tod.pdf>).

¹² Es usual en la bibliografía local referirse al conjunto de innovaciones como “paquete” tecnológico para dar cuenta del modo en que ellas están concatenadas e implicadas unas con otras: la semilla transgénica con el glifosato, un tipo de tecnología de siembra (la siembra directa), de organización laboral, de gestión.

¹³ La política neoliberal afectó especialmente al sector agropecuario: baste recordar la eliminación de casi todos los impuestos a las exportaciones; la supresión de aranceles a la importación de bienes de capital, lo que se tradujo en una renovación importante del parque de maquinarias; así como también la eliminación de casi todos los organismos reguladores y la privatización de los servicios públicos. Otro aspecto sustantivo fue la retracción del Estado del mercado financiero, lo que afectó el acceso al crédito.

pequeños y medianos agricultores familiares, dejando a muchos de ellos afuera de la producción,¹⁴ como a empresarios de mayor tamaño.

Importa subrayar aquí la transformación en el perfil de las capas empresariales, que involucra en primer lugar la conformación de su cúpula. Se trata de un cambio importante que refiere tanto a la existencia de una franja que concentra los mayores volúmenes de tierra y producción, como a las formas de control que ejercen sobre ellos y a las relaciones que mantienen con otros segmentos y actores del complejo sojero (los proveedores de semillas, procesadores, exportadores, pequeños y medianos propietarios que ceden sus tierras, contratistas de servicios). Como señalan algunos trabajos (Beltrán, s/f), la difusión de estas formas de control —la llamada agricultura contractual— está vinculada con la aparición de lo que Murmis caracterizó como las “megaempresas” (1998). Ellas son las “grandes jugadoras del negocio agrícola”, sus posiciones dominantes están ligadas a la economía global y a la nueva fase de la transnacionalización de los sistemas agroalimentarios (Robinson, 2008). Estas grandes empresas —cuyo número se estima en no más de una veintena— manejan enormes extensiones de tierra en Argentina y en los países limítrofes (Bolivia, Paraguay, Uruguay), que rondan las 100 000 hectáreas y en algunos casos las superan —revistas de negocios dan ejemplos de empresas de más de 200 000 hectáreas—. Se trata de empresas con acceso y control del capital financiero, que manejan el *know-how* de gestión y el *management*. A través de contratos formales e informales con distintos agentes gerencian tierras propias y/o alquiladas; éstas últimas representan la mayor proporción de la superficie que operan, registrándose casos donde no se trabajan campos en propiedad. Precisamente este tipo de mecanismos son los que les permitieron integrar a una parte de los expulsados,¹⁵ sea como contratistas (en tanto quienes se expanden requieren de los servicios de cosecha, siembra, transporte o fumigación que éstos ofrecen) o como propietarios que les arriendan sus tierras.

Por debajo de estas megaempresas —que son las expresiones más elocuentes de la nueva figura social del agronegocio— encontramos otros empresarios que disponen en términos relativos de menores recursos, pero que incorporan muchos de los rasgos presentes en las megaempresas: la profe-

¹⁴ Según datos de los censos agropecuarios, entre 1988 y 2002 desaparecieron 88 000 explotaciones agropecuarias (21%) y el tamaño promedio de las mismas aumentó un 25% para alcanzar 587 hectáreas en 2002.

¹⁵ Cabe destacar que no se cuenta con estudios ciertos sobre su incidencia en el proceso más global de expulsión de agentes. Aún se precisa de investigaciones circunstanciadas que permitan sopesar el grado en que tal inclusión ha sido efectiva. Se trata de un aspecto central en la discusión académica y política sobre la dinámica del actual modelo.

sionalización de la gestión de la explotación, la organización del trabajo, la incorporación y actualización tecnológica. Se trata de un sector heterogéneo cuyo peso en el total de explotaciones del país es estimado por un estudio del Ministerio de Agricultura sobre la base de los datos del Censo Nacional Agropecuario de 2002,¹⁶ en alrededor de un cuarto.¹⁷ Esta estimación general adquiere mayor precisión si consideramos el peso de las explotaciones de 5 000 hectáreas y más, las cuales representaban en 2002 dos por ciento del total de unidades productivas y controlaban casi 50% de la superficie cultivada. La consolidación productiva y económica del empresariado y particularmente de su cúpula se hace evidente desde 2002 en una coyuntura que combina altos precios internacionales y una mejora sustantiva de los precios relativos del sector a partir de la aplicación de un nuevo régimen cambiario.

Esta morfología social es resultante de un proceso de reproducción y recomposición social. Si atendemos a la posición estructural de estos grupos, se observan características de mayor concentración y una complejización de formas de inserción, mediante relaciones donde la propiedad de la tierra y el capital se combinan y dejan lugar a nuevos vínculos y relaciones de producción. Si atendemos a los modos de acceso y permanencia en la clase empresarial, podemos hablar de un proceso de recomposición resultante de distintos movimientos: por un lado, el ingreso de actores extra agrarios que entran a la actividad atraídos por sus altas tasas de retorno; por el otro, la reconversión del perfil de los descendientes de los tradicionales grandes propietarios—proceso relacionado con un compromiso más activo y profesionalizado con la gestión de los campos familiares—; finalmente, la movilidad social ascendente registrada entre las franjas superiores de la agricultura familiar pampeana.

Se trata entonces de una categoría internamente diferenciada, que en los últimos años adquirió cierta consistencia interna, siendo el conflicto de 2008 un hito central en ese proceso, así como también las narrativas que desde las nuevas organizaciones del sector se fueron produciendo en torno de la consolidación del empresariado y de sus formas de acumulación. Como veremos, estas organizaciones de carácter profesional tuvieron un papel fundamental al ubicar en el cambio de tecnologías y particularmente de “mentalidades”, la propia explicación de cómo acumulan riqueza, justificándola y legitimándola ante sí mismos y ante otros grupos sociales. La cuestión no es menor ya que les

¹⁶ Los censos recogen información sobre explotaciones agropecuarias, pero no permiten reconstruir las relaciones de propiedad y/o control de más de una explotación por parte de una misma persona física o jurídica.

¹⁷ El mencionado estudio fue realizado por el PROINDER (Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios).

permite construir representaciones sobre el modelo socio-productivo que dinamizan como uno con potencialidad inclusiva, lo que tiene consecuencias en las creencias y valores que sostienen sus comportamientos políticos.

Las corporaciones agrarias

Desde mediados del siglo XIX, la representación de los grandes estancieros pampeanos estuvo en manos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), creada en 1866. En su análisis sobre el ruralismo terrateniente, Hora subraya al describir a la SRA la “acusada vocación modernizante, a la vez técnica y política, (que) singularizaba a los promotores de la primera asociación rural del país” (2009:25). Para el autor, desde sus orígenes esta entidad manifestó la necesidad de transformar a los grandes terratenientes en “líderes” de una transformación que reconvirtiera el perfil del propio empresariado y el contexto en el que actuaban (Hora, 2009:25). Dicho contexto no sólo refería a variables macroeconómicas, de mercado, sino también a modelos de producción y tecnología agraria. Así, “cambio y modernización” constituyeron uno de los rasgos más originales del grupo fundador de SRA, que buscaba enraizarse como representación del conjunto de los terratenientes.

La relación entre esta próspera elite y el régimen político se vio tensionada a partir de 1912, cuando una nueva ley electoral (Ley Sáenz Peña) permitió el acceso de grupos hasta entonces excluidos de la política, y en el ámbito rural, se conformó la Federación Agraria Argentina (FAA), expresión de una oposición —terratenientes/colonos— que estructuró políticamente las existentes líneas de fractura de la estructura agraria. La mayor heterogeneidad del mapa institucional, la conflictividad agraria (de las cuales la emergencia de FAA daba cuenta) y la complejización de las formas de construcción y agregación de intereses, se profundizaron en 1936 con la creación de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), integrada por antiguos socios de la SRA, enfrentados a los capitales norteamericanos que controlaban la industrialización y comercialización de la carne. Así, la pretensión de ser articuladora del conjunto de actores de la economía agroexportadora y de encarnar los valores y modelos de nación y sociedad deseable (Palomino, 1988), se vio contestada, y el liderazgo de la SRA resquebrajado.

En el plano nacional, y como consecuencia de la industrialización y el crecimiento urbano, la posición del sector agropecuario en la economía fue cambiando; la irrupción del peronismo en 1945 profundizó la pérdida de gravitación económica y social de los grandes terratenientes. Sin embargo,

como hemos señalado, dada su posición en la estructura económica, los grandes productores retuvieron para sí la capacidad de negociar y presionar al Estado para obtener ventajas y/o no ser perjudicados en sus intereses.

El núcleo ideológico de estos grandes productores se organizó en torno a la libertad de los mercados, la subsidiariedad del Estado y la salvaguarda de la propiedad privada —principios que organizan sus demandas públicas— y en apelaciones generales a la defensa del “campo” como una unidad y a su rol preponderante para el conjunto de la nación. Estos elementos conformaban un sistema coherente de ideas, fortalecido en la segunda posguerra, por la oposición al peronismo. Plantea Heredia (2003), que el universo ideológico de la elite agropecuaria y de la SRA, su portavoz principal, quedó estrechamente asociado al antiperonismo y a la condena de toda forma de populismo, al igual que en el caso de las Confederaciones Rurales Argentinas —la CRA, entidad que agrupa a la CARBAP y otras regionales similares—, que comparten esos principios ideológicos, si bien diferenciándose en las estrategias discursivas y de acción privilegiadas (Nun y Lattuada, 1991).

El tipo de acción corporativa desarrollada se caracterizó en esta etapa por un “ejercicio de influencia personal, el contacto directo con los funcionarios, un profundo conocimiento de los mecanismos formales e informales del proceso de toma de decisiones y, en general, una fuerte presencia en la estructura de poder, derivada de sus estrechos vínculos con otros grandes grupos de intereses” (Nun y Lattuada, 1991:65). En el caso de la CRA, con menor acceso a esas redes de influencia, se observaría una mayor inclinación por acciones de confrontación con el Estado y de “presión por choque”. Más allá de estas diferencias, las políticas de precios y de impuestos fueron históricamente los puntales de la acción de estas entidades. Este tipo de corporativismo ha buscado recomponer cierto orden de cosas (la centralidad del agro para la economía y la identidad nacional) en momentos en que está amenazado, lo que fue eficaz para bloquear políticas públicas que buscaran incidir globalmente sobre sus condiciones de funcionamiento. Así, puede trazarse un hilo conductor que va desde la pérdida de centralidad del agro frente a la emergencia de otros sectores y actores dinámicos en la posguerra, a la concentración de la acción corporativa en la defensa sectorial y el abandono de aquellas prácticas que construían a los grandes productores como agentes centrales de cualquier proyecto de modernización de la economía y la sociedad nacionales.

Pero no eran sólo estas formas de representación de intereses las únicas reconocibles entre los empresarios rurales argentinos. Si en el país la representación electoral —propia de las mediaciones neocorporativas— no caracterizó sus formas de influencia, sí fue así a partir de los años sesenta, y

de manera significativa en las últimas dos décadas, en las asociaciones profesionales. Ubicadas sobre la *expertise* técnica, ellas conforman actores importantes para el estudio de los canales de construcción y articulación de los intereses dominantes del sector agropecuario, así como también para la construcción de un liderazgo social y político, a partir de la restitución y resignificación de la importancia material y simbólica de la tecnología en los imaginarios sociales sobre el progreso.

Retomando las tradiciones: técnica y política

Hacia inicios de los sesenta, surge otro tipo de organización con la que comienzan a referenciarse los grandes productores: la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA). Es una red de empresarios organizados en grupos de trabajo para intercambiar información y ser asesorados en materia tecnológica, de gestión empresarial, etc. Inicialmente conformada por grupos de la elite pampeana, a partir de los setenta, la AACREA comenzó a incluir a medianos empresarios e incluso a “chacareros”.¹⁸ Aún cuando el proceso no fue fácil, es menester señalar que las transformaciones que había atravesado la estructura agraria habían ido reconfigurando el histórico antagonismo colono/oligarquía, y espacios como los grupos CREA fueron, con el transcurso del tiempo, estructurando experiencias que llevaron a los propios actores a percibir las líneas de fractura de la estructura social de un modo distinto.

La idea inicial de los fundadores era sencilla: buscar en conjunto la forma de resolver problemas técnicos comunes. La iniciativa retomaba el interés y el impulso dado por los pioneros de la SRA a la innovación técnica y a la transformación de la gestión empresarial, algo que parecía haber perdido vigor en aquella entidad, al menos en la visión de los terratenientes que fundan la AACREA. En efecto, como hemos analizado en otro trabajo, los documentos institucionales que recogen los discursos fundadores de los primeros miembros son enfáticos en señalar a sus pares que la evolución negativa de la producción y la rentabilidad —recordemos, es el periodo que va entre mediados de las décadas de 1950 y 1970, conocido como etapa del estancamiento pampeano—, o los problemas que afectaban a sus explotaciones no

¹⁸ El término identifica a una heterogénea capa de productores, que incluye desde productores basados en el trabajo familiar con cierta capacidad de acumulación (homologable a la figura del *farmer* norteamericano) hasta la pequeña burguesía agraria. En términos políticos, refiere al proceso histórico de lucha de los colonos inmigrantes por el acceso a la propiedad de la tierra, y a la constitución de una identidad definida por oposición a la oligarquía terrateniente.

lograrían ser resueltos simplemente a través de políticas de precios. Se requería asimismo de transformaciones técnicas en la producción, en la organización de las empresas y en la gestión. Así, desde su emergencia, esta asociación pone en juego al conocimiento experto como principio legitimador de su existencia, generando un ámbito de acción que podía ser sustraído fácilmente de la discusión y el escrutinio político.

Estas apelaciones eran críticas de la eficacia de la acción corporativa tradicional, al menos como única estrategia para responder a las situaciones que por entonces se planteaban. Lo que debía cambiar también era la “mentalidad” de esa elite propietaria, que había quedado atrapada en la reacción antiperonista, ubicando en la intervención del Estado populista la raíz de todos los males.

En suma, se necesitaba, en la visión de estos hombres, de una verdadera vocación de liderazgo para transformar el perfil empresarial de los grandes propietarios y productores para que la asociación pudiera “ser la punta de lanza de una nueva agricultura”, que permitiera al sector agropecuario retomar su lugar en la economía y en la sociedad nacional. Ello requería de una nueva manera de entender y practicar la actividad agropecuaria y de una nueva identidad empresarial, desde la cual convocar a sus pares.

Desde sus inicios, esta asociación profesional¹⁹ —como también de otras que surgieron posteriormente, como la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID)— apela al empresariado rural de un modo preciso con incitaciones prácticas a la acción, primero “tranqueras” adentro (a través de la capacitación y la experimentación), y luego “tranqueras afuera”. Las primeras han impulsado cambios en la organización de la producción y en las estrategias desarrolladas por los empresarios, la construcción de redes, la profesionalización de la gestión. Como hemos señalado, estos cambios son parte de la recomposición del empresariado rural, desplazando a algunos de ellos, en especial a los de menor tamaño, devenidos rentistas; permitiendo el ingreso de profesionales urbanos; en fin, reconfigurando el perfil socioproductivo del empresariado. Uno de los rasgos más resaltados por los propios protagonistas es su condición de “nueva generación”, lo que refiere tanto a lo demográfico —a modo de ejemplo, 44% de los socios de la AACREA tienen entre 40 y 55 años, al tiempo que también se registra la presencia de 19%

¹⁹ AACREA agrupa actualmente a unos 1 800 socios, cuyas empresas superan, en promedio, las 2 500 hectáreas. Originalmente, predominaban los productores ganaderos (y entre ellos, de invernada). Actualmente, ese perfil ha cambiado, integrando entre sus filas a los productores sojeros más importantes. Un análisis de esta organización profesional, los núcleos de su identidad institucional y su relación con la construcción de una clase dirigente, puede verse en Gras (2009).

cuyas edades van de los 30 a los 40²⁰— como a las formas en que entienden y practican la actividad. Vale resaltar que 59% de los socios de los CREA tiene formación universitaria completa, y entre ellos 18% ha cursado estudios de posgrado, en general en agronegocios o economía empresarial.

Por su parte, las acciones “tranqueras afuera” han buscado conectar a la clase empresarial con el Estado, movilizándolo mediante mecanismos de influencia, como el asesoramiento. Si bien esto no es estrictamente novedoso, sí lo es la recurrencia, casi con exclusividad, al conocimiento científico como base y fuente de las interacciones. Este empresariado se ha recreado en un campo de poder diferente al constituido por la propiedad de grandes extensiones de tierras. Ese campo de poder es hoy el del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación permanente; allí encuentra el empresariado que se ha dinamizado con la expansión del nuevo modelo agrario lo que —siguiendo a Boltanski y Chiapello (2002)— puede definirse como una lógica legítima de justificación. No es ese el único campo de poder en el que se constituyen: el económico financiero explica finalmente las posiciones en la estructura y heterogeneidades internas del empresariado, aunque esos capitales económicos se constituyen en la actualidad por referencias mucho más diversas, amplias y complejas que la sola propiedad de la tierra.

Pero la legitimidad que los empresarios rurales, particularmente los grandes, fueron logrando como agentes productivos y económicos no ha sido traducible sin más en legitimidad para actuar en otros ámbitos. En ese marco, ubicamos los comportamientos que sus asociaciones fueron desplegando en las últimas décadas, a partir de los cuales fueron cimentando la asociación entre su liderazgo tecnológico y productivo y la auto-percibida necesidad de construcción de liderazgos sociopolíticos consistentes con su capacidad de generar riqueza e importancia para la economía nacional.

Una primera esfera de acción en ese sentido es la que les permite resituarse como actores con proyectos y propuestas, y no sólo como sector que busca defender las posiciones alcanzadas. En esa esfera, el papel de las asociaciones profesionales es central. Con ellas adquiere relevancia la influencia en el diseño y ejecución de políticas públicas —en particular aquellas que moldean las condiciones de producción del sector agropecuario y que inciden en su dinámica de acumulación—; influencia cuya legitimidad es construida a partir de la autoridad que otorga el discurso tecno-científico. Las interacciones entre la AACREA y los llamados *policy-makers* han sido cambiantes a lo largo del tiempo, y en ese sentido los grados de autonomía estatal y la mayor o menor apertura de esos puntos de acceso no son ajenos a las

²⁰ Estos datos provienen de una encuesta realizada durante 2009 a miembros de esa entidad.

transformaciones en las instituciones estatales y en las características organizativas y perfil de los miembros de la AACREA.

Uno de los ámbitos fundamentales donde la AACREA ha desarrollado influencia es el de la política tecnológica. Un ejemplo bastará para ilustrarlo: su participación en la Mesa Directiva del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), principal instrumento del Estado nacional para impulsar innovaciones tecnológicas y productivas, mediante la investigación en desarrollo y extensión. Desde hace varias décadas la AACREA integra su Consejo Directivo, encargado de fijar las políticas y estrategias globales del organismo. Si bien las corporaciones (SRA, CRA) también tienen presencia en este órgano del INTA, la impronta de la AACREA es reconocible en una de las políticas más importantes que ese organismo puso en marcha en los noventa: el programa Cambio Rural. Al mismo tiempo, allí se deciden las investigaciones que el INTA financia y luego transfiere a través de las redes de extensionistas a los productores. En esta materia, la AACREA ha sido una fuerte militante de la investigación en biotecnologías y de la organización de metodologías de transferencia.

Cambio Rural, cuya población destinataria son pequeños y medianos productores familiares, tuvo como premisa la transferencia tecnológica, y una dinámica de implementación semejante a la metodología de los grupos CREA. Este programa es un ejemplo elocuente de la influencia en decisiones que son a la vez estratégicas para los intereses del empresariado: articulando con el Estado para establecer prioridades de agenda, y proponiendo la construcción de “redes público-privadas” para promover ciertos cambios sustantivos en el modelo productivo (la managerialización de la gestión, el uso de ciertas técnicas y formas de organización de la producción) que implicaron la “desatención” de actividades que quedaron desplazadas en el nuevo modelo. Por último, en el ámbito de la innovación tecnológica, la AACREA y la AAPRESID participan en distintas iniciativas como contraparte del aparato estatal de ciencia y técnica, a la vez que sus miembros y asesores integran cátedras de las facultades de agronomía tanto en las etapas de formación de grado como de posgrado, con la organización de maestrías en agronegocios. Todas estas instancias de interacción con las instituciones estatales fueron fundamentales para la construcción de un ambiente económico —y también político— que favoreció la instauración del nuevo patrón de acumulación agraria.²¹

²¹ Es interesante en este sentido señalar, en contraste con lo ocurrido con Brasil, el escaso cuestionamiento público y conflictividad respecto de la centralidad de las biotecnologías (Newell, 2009). Por otra parte, la relativamente marginal discusión en torno del modelo sojero puede explicarse también por la efectiva construcción de un imaginario —construcción

Cabe insistir en la doble dimensión de estos cambios —uso de biotecnología, y desarrollo de un tipo de gestión y organización del trabajo— y su relación con la construcción y difusión de un nuevo modelo de empresariado rural. Empresariado que podía, por fin, presentar credenciales para ejercer el liderazgo tanto sobre sus pares rurales, como en relación al conjunto de los hombres de negocio del país. Proceso hegemonizado por sus franjas altas —varios de sus miembros son referentes a emular por el resto del empresariado²²—, las cuales han sido particularmente eficaces para incorporar a franjas intermedias de la clase empresarial rural, aquellas cuyo negocio no tiene el horizonte global de los grandes empresarios en las organizaciones profesionales, sea como miembros activos o como participantes de las innumerables actividades que éstas llevan a cabo. Ello amplió las bases de reclutamiento del empresariado, otorgándole una mayor movilidad interna. Más importante aún, este proceso impactó en la reconstitución de fronteras sociales entre las distintas capas del empresariado —más ligados al origen terrateniente de finales del siglo XIX y principios del XX por un lado, o resultantes del acceso a la propiedad de la tierra durante el primer peronismo, por el otro—, de modo que las anteriores líneas de fractura de la estructura social agraria perdieron la potencialidad que otrora habían tenido para marcar el escenario político gremial y las alianzas entre actores.

Cabe formular, para cerrar este apartado, un interrogante: ¿qué implica la emergencia de estas asociaciones profesionales que se asientan sobre su carácter técnico para influir en los procesos decisivos, y que mediante su actividad han sido eficaces en la pretensión hegemónica de construir un perfil de empresariado moderno, a través de mecanismos tan variados como la organización de maestrías de agronegocios, programas de radio, prensa? Es decir, ¿qué implica en relación con la presencia de otro tipo de organizaciones como la SRA o la CRA? Si bien es cierto que éstas evidenciaron crisis en su capacidad de representación de intereses, ello no implica el reemplazo de un tipo de práctica corporativa por otra. Antes bien conviene pensar en el modo en que ambas convergen —en qué contextos y situaciones— para cimentar la capacidad de influencia del empresariado a través de distintos dispositivos de acumulación de poder.

en la que las asociaciones profesionales han jugado un rol central— de continuidad de la Argentina como país agrario, donde el agro vuelve a ofrecer posibilidades de crecimiento y desarrollo.

²² El caso más notorio es el empresario Gustavo Grobocopatel. Asimismo, es usual que en las facultades de agronomía se estudien “casos” de varias de estas empresas, siguiendo la metodología de negocios de Harvard.

Tranqueras afuera: liderazgo social y político en tiempos de conflicto

Si bien la intervención en la esfera de la política pública permitió fortalecer el liderazgo económico del empresariado —eran ya la “punta de lanza” de una nueva agricultura—, su actuación en ámbitos más amplios que el sectorial, era aún restringida. El contexto que se abre con la crisis de 2001 funcionó como un estímulo potente para la emergencia de preocupaciones en su interior respecto de su rol en la sociedad más amplia. Tras la explosión del régimen de convertibilidad —que había marcado el ritmo de la economía y sociedad argentina durante toda la década de 1990—, las asociaciones profesionales se constituyeron en el espacio en el cual no pocos empresarios comenzaron a plantearse su lugar en el proceso de salida de la crisis. Estas preocupaciones pueden observarse, por ejemplo, en los temas con los que la AACREA convocaba a sus congresos, a los que invitaba a intelectuales, líderes políticos y religiosos: en 2001, el lema fue “Comprender, organizarse, actuar”; en 2002 “Somos parte de una Argentina posible” y en 2007 “El campo trabajando más allá del campo”. Otro tipo de iniciativas fueron los programas de “Formación de Líderes” y de apoyo a escuelas rurales, a través de los cuales buscaban sensibilizar a los propios empresarios sobre la necesidad de involucrarse activamente en problemáticas sociales, y revertir cierto desinterés por el compromiso político.

Sin embargo, esa vocación no trascendía el ámbito local y las iniciativas de tono asistencialista. Tampoco había en la política gubernamental situaciones que propiciaran otro tipo de ejercicio que el que llevaban adelante la SRA o la CRA, es decir, la tradicional gimnasia corporativa de demanda en torno a medidas consideradas perjudiciales por parte de estos actores. De hecho, es posible plantearse que entidades como la SRA, la CRA e incluso la FAA han evidenciado cierto grado de autonomía respecto de sus representados, autonomía que ha sido particularmente visible en momentos de cambio. En este sentido, cabe mencionar que en 2002 las retenciones a las exportaciones fueron reinstauradas —luego que el gobierno neoliberal de C. Menem las eliminara, cumpliendo así con una histórica demanda de la SRA y la CRA— y que más allá de reclamos puntuales de las entidades, inicialmente la medida no movilizó gran oposición entre los empresarios.

Con la presidencia de Cristina F. de Kirchner, el escenario cambió, con medidas como la instauración de cupos de exportación para el control de los precios internos de los granos (trigo y maíz) y los aumentos en las alícuotas de las retenciones. A ello se sumó en 2007 la crisis financiera internacional —que incidió en los precios de los *commodities*— y en el plano interno, una de las sequías más importantes de las últimas décadas. En marzo de 2008, mediante

la Resolución N° 125, el Ministerio de Economía anunció un nuevo aumento de las retenciones —llevando dicho impuesto de 35% a 44% en el caso de la soja—, dándole un carácter móvil para acompañar las variaciones de los precios internacionales, lo que disparó el conflicto. Durante casi 4 meses se sucedieron cortes de ruta, movilizaciones y el cese de la comercialización de productos. En el mes de julio, luego de que la resolución fuera girada al Parlamento, el Senado la rechazó y las retenciones volvieron a su anterior nivel. Si bien los cortes de ruta cesaron, la movilización de los productores continuó con asambleas y diversos actos, que se prolongaron con distinta intensidad durante 2008 y 2009.

Aunque el epicentro del conflicto fue la región pampeana, pronto se observó su expansión a otras regiones, en consistencia con la sojización de regiones antiguamente marginales para los intereses agroexportadores pampeanos (como es el caso de las provincias del Chaco, Formosa y Santiago del Estero, o el norte de Córdoba). En tal sentido, el conflicto contribuyó a configurar un actor —“los sojeros”— con una ampliada base social y geográfica, y que podía entonces hablar en nombre del conjunto del “interior” del país.

Nos interesa retomar el conflicto agrario de 2008 por una serie de razones. En primer lugar, porque al plantearse en el espacio público como un problema de distribución de ganancias extraordinarias, se cuestionaba la relación construida por el empresariado (en especial por sus franjas más altas) entre su vocación de cambio técnico y modernizadora, y su legitimidad como clase empresarial. En efecto, sus ganancias provenían —afirmaban— de la inversión en tecnologías y no del control patrimonial sobre la tierra. En segundo lugar, porque el conflicto los conectaba con temas (como la distribución de la renta) en relación a los cuales las fuerzas políticas populares los habían deñostado históricamente.

En segundo lugar, a diferencia de otros momentos en los cuales los conflictos entre las corporaciones agrarias y los gobiernos de turno no alcanzaban repercusiones significativas en la opinión pública, o por el contrario, las demandas y acciones de aquellas eran ampliamente rechazadas,²³ en esta ocasión sorprendió el vasto apoyo generado en distintos sectores sociales y políticos. En este sentido, el llamado “campo” logró eficacia en posicionarse como un factor de poder para otros actores, quienes encontraron en la alianza con las entidades y organizaciones de los empresarios en conflicto, elementos po-

²³ Ello sucedió, por ejemplo, con las protestas llevadas adelante durante el gobierno radical de R. Alfonsín (1983-1988), primer gobierno democrático luego de la última dictadura militar, por la CRA y la SRA.

tentes para configurar sus propias identidades políticas. Es lo que pudo observarse con los distintos partidos de la oposición: una parte no menor de sus posiciones en ocasión de las elecciones legislativas de 2009 radicó en la medida en que incorporaban los argumentos y demandas de los empresarios rurales en sus agendas parlamentarias. En tal sentido, el conflicto interesa porque constituye una instancia pocas veces tan nítida —al menos desde mediados del siglo XX en adelante— en que el empresariado rural logró efectividad para intervenir en la esfera político-institucional.

En los puntos que siguen, abordamos las ideas que las organizaciones y grupos de empresarios fueron (re)creando a lo largo del mencionado conflicto, particularmente en referencia a: *i*) la relación con el Estado, cuestión que la amplia desregulación del mercado en los noventa había quitado del medio como “problema” para el empresariado rural; y *ii*) las formas políticas que su liderazgo productivo y económico requería, lo que involucraba revisar tanto la relación entre las diversas capas del empresariado (grandes, medianos, pequeños), como las formas organizativas hasta entonces adoptadas. Ambos aspectos, que señalaremos brevemente, se revelaron como los más sustantivos durante el trabajo de campo.

La crítica a la política económica

Éste es el nudo principal de la reacción del empresariado rural, y el que menos controversias despierta entre los diversos grupos que componen el llamado “campo”. El eje de esa crítica está en la intervención del Estado en el mercado y en los procesos de formación de precios, crítica arraigada en el empresariado que ha visto históricamente al Estado como obstáculo para su normal desenvolvimiento.

Medidas como el aumento de las retenciones —sin considerar sus impactos diferenciales según el tamaño de las explotaciones— o la creación de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) —a través de la cual el gobierno había intervenido en el mercado de exportación, asignando cupos—, incidían de manera no menor en las ganancias empresariales y en rentabilidad de sus inversiones. Muchos reeditaban las viejas demandas de libre mercado y la desconfianza en la intervención estatal. “La gente se enfureció por el carácter expropiador de las retenciones, y que todo el tiempo te cambien las reglas del juego, así nadie puede producir”, nos decía un empresario en una asamblea a fines de 2008. A ello agregaban la crítica a lo que consideraban la falta de racionalidad de las medidas, que habían constituido un freno “artificial” al crecimiento del sector agropecuario. “Ahora realmen-

te (la plata) estaba puesta en la producción, entonces ¡pararlo artificialmente! Las retenciones lo paran artificialmente... Es como que fue demasiada avidez por las retenciones” (Francisco, febrero de 2009).

La crítica no está solamente basada en la referencia a la situación empresarial sino que también retomaba la de los productores familiares, agitando el fantasma de la expulsión de productores durante la década de 1990 —todavía en la memoria de aquellos— adjudicándola ya no a la lógica del actual modelo productivo agrario sino a los desaciertos de la política económica, fundamentalmente la intervención en los mercados. En la opinión de un pequeño empresario participante de la asamblea mencionada:

Otras veces, la crisis era por varios factores, estaban sí políticas poco favorables para la producción, como el 1 a 1, pero también te había permitido tecnificarte, y estaban los problemas del clima, de los precios internacionales bajos. En cambio, ahora todas esas variables eran favorables y la política del gobierno provocó esta crisis, donde vamos a ir cayendo, yo no sé cuantos irán a quedar en pie. Deben querer concentrar 4 o 5 para poder controlarlos mejor.

Las voces de los empresarios eran coincidentes: “que un gobierno nacional genere una normativa que destruya las riquezas es absurdo” (Gerardo, marzo de 2009).

En segundo lugar, la crítica involucraba el argumento sobre cómo las medidas del gobierno perjudicaban las relaciones virtuosas que el comportamiento de una clase empresarial moderna había cimentado entre el campo y la ciudad. Hablaban así de un tipo de desarrollo que había comenzado a mostrar sus posibilidades de integración social en el interior del país. En tal sentido, se vislumbró durante el conflicto —y ello fue un elemento importante en la creación de alianzas y apoyos con otros sectores productivos y sociales— un empresariado que renovaba tanto los lenguajes como los temas que invocaba y proponía.

Yo creo que quedó muchísimo en los pueblos. Porque no te olvides que estas empresas que tenían ganancias no es que se iban con lo que estaban ganando, pagan lo que se llama impuesto a las ganancias. O sea que en la medida en que vos ganas, pagás, no es que te llevas la ganancia. Y básicamente la gente que vive en el interior y vive del campo, en general reinvierte en su zona. Es muy común que se reinvierta hasta el 100%, es mucho más probable que en los grandes conglomerados urbanos haya gente ahorrando en pesos, fuera de su país o en dólares, que en el interior. En el interior compras un terreno, edificas una casa, la gente compra dos vacas más, todos crecen, por eso es inconcebible que no se defiendan eso (...) ha dejado un movimiento importantísimo de gente, tremendo. Y bueno

cuando empieza a aflojar, empieza a aflojar todo el consumo local, y está bien, habrá menos ricos, menos riqueza, pero también va a haber más pobres, de eso no tengo dudas. (Francisco, octubre de 2008)

Otro rasgo, derivado del anterior, fue subrayado de manera sistemática a lo largo del conflicto por los dirigentes agropecuarios, sus representados y la prensa: esa misma riqueza que el “campo” producía y reinvertía localmente, impulsando el bienestar local, también llegaba a los grandes aglomerados urbanos, a través de los planes sociales, financiados con las retenciones. La crítica era que, además de excesivas, las retenciones habían servido, en manos de “una clase política corrupta”, no a los fines inicialmente previstos, sino a consolidar el clientelismo y el control social de los actores económicos (mediante subsidios), todo lo cual atentaba contra las formas republicanas de gobierno: “Mirá, con 90 mil millones de pesos que entraron por cuatro años de retenciones, si hubiesen estado aplicados exclusivamente a la pobreza y a la indigencia, hoy en Argentina no habría ni pobres ni indigentes” (Gastón, noviembre de 2008).

Si bien estos discursos sobre el modelo de desarrollo están sustentados en creencias muy generales, capaces de movilizar voluntades muy distintas, interesa subrayar —como se advierte en los distintos testimonios— que los entrevistados asignan a las retenciones un carácter anteriormente no presente en sus reacciones corporativas: a sus ojos perjudican un proceso virtuoso donde el cambio técnico podría asociarse al crecimiento económico y al desarrollo social. Esta forma de concebir el papel del cambio técnico no se interroga por las mediaciones que ligan las distintas dimensiones y la medida en que ellas son construidas y disputadas socialmente.

El crecimiento que las economías locales observaron luego de 2002 son para los empresarios rurales una muestra acabada de cómo el modelo contiene mecanismos de distribución de la riqueza;²⁴ desde esa certeza plantean críticas a la clase política. Así, se presentaron a la sociedad entrelazando el reclamo por la renta con otro “cívico” por las formas republicanas. En ese contexto, para los entrevistados comenzó a plantearse la necesidad de una representación política propia que asegurara sus intereses y la consideración de sus puntos de vista en las políticas del Estado.

²⁴ Este es un punto de controversias con otras miradas y representaciones sobre el actual modelo agrario en Argentina, véase Gras y Hernández (2009).

Crítica a la clase política y la apuesta por un programa propio

El conflicto por las retenciones movilizó críticas al partido de gobierno y su manejo del Estado, tanto del empresariado rural como de sectores urbanos, reactivando de manera inesperada representaciones clasistas y lógicas binarias que el país había conocido décadas atrás y que parecían perimidas (Gras y Hernández, 2009; Svampa, 2008). No es nuestra intención aquí profundizar en ellas sino en las ideas que sobre la política y la relación de los empresarios con el Estado pueden leerse a través del prisma que el conflicto ofrece.

Si bien la crítica de los empresarios se concentraba en el partido gobernante, también alcanzaban a los opositores: la relación con la clase política fue auscultada, en la medida en que los grados de autonomía que ella adquiere en distintos momentos históricos intervienen de manera directa en las capacidades concretas de los actores agrarios —en particular de sus grupos dominantes— para asegurarse, a través de la política pública, las condiciones de su reproducción y expansión.

Es en ese punto donde empieza a ser discutida la necesidad de alguna otra forma de acción en defensa de los propios intereses, además de las corporativas. Hay allí dos discusiones que sólo podremos mencionar brevemente. La primera tiene que ver con la medida en que el actual mapa institucional del sector agropecuario asegura la representación de los intereses de sus actores centrales. Se planteó así en las asambleas y documentos de distintos grupos que participaban de los debates, la necesidad de una nueva forma organizativa capaz de trascender la lógica de las representaciones asentadas sobre las líneas de fractura de la estructura social. Numerosos entrevistados han sostenido que esos clivajes ya no son centrales, por lo que el “sector” debiera encontrar una forma de representación donde la “diversidad” esté contenida. En estas ideas, el campo de poder interno es concebido como plural pero no antagónico. Esa construcción implica también definir sus límites externos: al hablar de “sector” nuestros entrevistados excluyen a los grupos campesinos que están presentes en el agro argentino, planteando que ellos no son parte de la política agraria —en tanto no los consideran ligados productivamente a la tierra— sino que deben ser atendidos por políticas sociales.

La segunda discusión refiere a la medida en que las estrategias para mantener y ampliar su capacidad de influencia en la vida pública y política deberían incluir la participación electoral. En varias asambleas se dio ese debate, que puede resumirse en dos posturas: continuar con la acción gremial y la búsqueda de acuerdos formales y/o informales con el gobierno, o bien, involucrarse en la dinámica partidaria, ampliando la base de apoyo política con la búsqueda de aliados en la sociedad civil:

Tenemos temas que hay que atender ya por lo cual seguramente hay que salir a cortar rutas pero también hay que trabajar para adelante. Tenemos que participar sí o sí en política porque este es un problema político. No lo hemos hecho antes y el no haber participado en política es lo que transformó nuestra actividad, nuestra vida, nuestro modo de vivir en una porquería, porque los políticos son una manga de chorros y son los que nos están gobernando. Para eso tenemos que ir a cada partido, antes de las elecciones, para formar el candidato, o bien para poner un candidato propio, para comprometerlos en qué van a hacer en el caso agropecuario cuando sean gobierno. (Palabras de un empresario en una asamblea a principios de 2009)

En tal sentido, al definir al conflicto como “político” —y ya no sólo “económico” como había sido inicialmente— los empresarios hacían referencia en primer lugar al hecho de que la trama institucional existente (sus corporaciones) no lograba articular una comunicación más o menos previsible con las autoridades. En las asambleas se escuchaban críticas —a veces más o menos veladas, otras explícitas— al modo en que ellas ejercían su representación en el conflicto, y a lo que, entendían, se revelaban como los límites de la discusión y negociación sectorial enmarcada en los mecanismos clásicos. En segundo lugar, la definición del conflicto como político hacía referencia a la necesidad de acceder a los mecanismos de reclutamiento y formación de la clase política, “formar” sus propios dirigentes políticos. Al respecto, uno de los productores agropecuarios más grandes del país nos señalaba:

yo no creo para nada en un partido agrario, ésa no es la idea (...) lo que entiendo es que nosotros tenemos que darles influencia positivamente, la mayor cantidad de los partidos políticos, para que muchos de los que se dedican sanamente a la política puedan por lo menos escuchar y tratar de entender nuestra visión de una Argentina integrada donde creemos que la agro-industria tiene mucho que aportar a las generaciones posteriores de todos los argentinos (...) es la lógica de tratar de buscar que muchos políticos de distintos partidos entiendan estas cosas que pensamos nosotros, entonces darle un marco ideológico. (Entrevista, marzo de 2009)

En ese marco, cobran sentido las actividades que desde las asociaciones profesionales se vienen realizando, como la formación de líderes locales y dirigentes. En ellas va construyéndose un ethos que orienta y da sentido a la acción, que les va permitiendo pensarse como una clase dirigente, tal como se refleja en las opiniones de uno de los empresarios de la cúpula del sector:

Claramente somos el poder político más importante que tiene la Argentina y el sector con mayor capacidad de movilización. Además de tener nuestro poder

económico, aunque no esté puesto al servicio político todavía. Está más puesto al servicio de armar un poder político pero queremos ver cómo tiene que ser el modelo de ese movimiento para poder ayudar a que todas estas ventajas comparativas generen más riqueza. Necesitamos relacionarnos mejor con el movimiento político, con los movimientos sociales, con la sociedad urbana, con la universidad. (Entrevista, marzo 2009)

La estrategia adoptada fue participar electoralmente, incorporándose a distintos partidos de la oposición.²⁵ En las elecciones de junio de 2009 en las que se renovaron parcialmente el parlamento nacional y algunas legislaturas provinciales, varios “agro-diputados” obtuvieron sus bancas. En el nivel nacional, fueron elegidos 18 en representación de 11 de las 22 provincias argentinas. De ellos, doce han tenido cargos en las entidades agropecuarias: cuatro en Confederaciones Rurales Argentinas (o en entidades de base asociadas a esta confederación); tres en la Sociedad Rural Argentina; y cinco en la Federación Agraria Argentina. La mayor parte de ellos integra la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados.

Las principales demandas de las movilizaciones agrarias —el rechazo al régimen de retenciones y la política de regulación de las exportaciones de granos y carnes— no lograron más que la formulación de iniciativas o propuestas presentadas en sesiones de la mencionada comisión, o en sesiones conjuntas con otras comisiones (en general, con la de Presupuesto y Hacienda). Según la información parlamentaria consultada,²⁶ estas iniciativas no lograron más que ser “estudiadas”, sin lograr dictámenes favorables para luego ser giradas para su tratamiento en el recinto general de la cámara de diputados. En buena medida, las iniciativas que proponían modificar el régimen de retenciones o la política de ventas al exterior formaron parte de la agenda de la comisión durante la primera mitad de 2010. En los meses posteriores, los proyectos bajo estudio y dictámenes se concentraron en aspectos específicos de producciones regionales (vitivinicultura, producción algodonera, apicultura, por ejemplo), los cuales no son centrales en las explotaciones de las franjas empresariales. En 2011, la agenda de trabajo de la comisión se organizó en torno de la actuación de la ONCCA, la extranjerización de tierras, la ley de se-

²⁵ En rigor se trata de acuerdos o alianzas partidarias: Unión-PRO, acuerdo entre un sector del peronismo no alineado con el gobierno nacional y el partido Propuesta Republicana (PRO); el Acuerdo Cívico y Social, alianza entre la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y el partido Generación por un Encuentro Nacional. Ambas alianzas se disolvieron en los meses posteriores a la elección de 2009. También hay frentes provinciales como el Frente por Todos de la provincia de Salta, o el Frente Cívico y Social de Córdoba.

²⁶ Véase el enlace: www1.hcdn.gov.ar/labordecomision/search_result.asp

millas y el Plan Estratégico Agroalimentario. Cabe señalar que tanto la ley de extranjerización de tierras como el Plan Estratégico han constituido iniciativas del Poder Ejecutivo.

Una primera aproximación a este proceso de participación sectorial en el sistema político permite avanzar algunas hipótesis que deberán ser profundizadas. Por un lado, observamos que la relación con los partidos políticos no avanzó más allá de la incorporación al proceso electoral; en otras palabras, los “agro-diputados” siguieron apareciendo frente a la opinión pública como voceros y representantes de sus corporaciones antes que como parte de colectivos político-partidarios más amplios, en los que las demandas sectoriales establecieran un diálogo programático con las de otros grupos sociales. En líneas generales, no es posible distinguir un patrón en las relaciones entre los “agro-diputados” y los partidos en cuyas listas se integraron; más aun, dirigentes de diferentes entidades fueron electos por un mismo partido. Pareciera entonces que un proceso que encontraba en la coyuntura electoral la posibilidad de dotar al ruralismo de expresiones representativas en el sistema político perdió su impulso inicial, al quedar recostado sobre las referencias corporativas.

Por otra parte, no deben dejar de tenerse en cuenta los conflictos entre las distintas entidades agropecuarias en el seno de la Mesa de Enlace, virtualmente desactivada en 2011; conflictos relacionados con las medidas a adoptar frente a la política gubernamental ganadera, y más fuertemente, con el grado de autonomía que en especial la Federación Agraria demandaba a sus pares para negociar con el gobierno medidas específicas para sus representados (particularmente, los pequeños productores familiares que desarrollan cultivos regionales). Ello pondría sobre el tapete los límites de la construcción política “del campo” como un todo; construcción que articulaba a actores con diferentes inserciones y posibilidades de acumulación en el actual modelo agrario.

En el inicio del siglo XXI, el campo vuelve a demandar un lugar en la distribución del poder acorde a su capacidad para producir riquezas. En este trabajo pretendimos acercarnos a algunos de los rasgos que singularizan las prácticas de sus actores centrales.

Los eventos recientes no son meramente una demanda específica por una medida económica. También se desplegaron, con todas sus tensiones y contradicciones, dimensiones complejas para pensar las relaciones entre empresarios, clase política, desarrollo y democracia. En efecto, el empresariado se

define por la consolidación de una base técnico-productiva que no tiene a la propiedad de la tierra como resorte exclusivo de su poderío. Pero sólo en los últimos años, y particularmente en el marco del conflicto con el gobierno, comenzaron a plantearse la traducción de su capital económico en capital político; la capacidad de movilización que lograron les mostró el liderazgo que podían ejercer. En el marco del espectacular crecimiento de la producción sojera en Argentina, sus actores principales se preguntaban —por primera vez al menos desde la transición democrática abierta en 1983— por la necesidad de una representación electoral, y discutieron nuevas formas de participación política.

Podríamos plantear que han reencontrado su vocación hegemónica. Por primera vez en la historia, ese liderazgo parece dar un lugar significativo a la construcción de conexiones institucionales en la arena pública y político-democrática. Pero también puso en evidencia que el modelo socio-productivo que dinamizan no tiene los mismos efectos de inclusión para todos los actores. Ese modelo que busca consolidarse y legitimarse como hegemónico en la arena pública puede ser sometido también a la crítica en ese mismo espacio.

Sin embargo, ése es aún un proceso que permanece como un interrogante abierto. Mientras que sus principales referentes continúan dando debate en los medios sobre los caminos más adecuados hacia el desarrollo nacional, ideas que son retomadas, difundidas y socializadas en sus organizaciones profesionales, la *performance* de la representación electoral ha sido por lo menos pobre. Sin grandes proyectos de ley presentados en el Congreso Nacional por los agro-diputados, tampoco lograron marcar la agenda de los partidos a los cuales contribuyeron a dar identidad opositora durante la campaña electoral de 2009. Al mismo tiempo, las entidades más gremiales persisten en sus comportamientos reactivos, que no siempre son fácilmente puestos en diálogo con los esquemas de acción más propositivos y dispuestos —como toda acción que busca ser hegemónica— a incluir y desarmar las críticas.

Recibido: enero, 2011

Revisado: julio, 2011

Correspondencia: Cramer 2240, Piso 1B/(1428)/Capital Federal, Argentina/correo electrónico: blason@armet.com.ar

Bibliografía

- Beltrán, Gastón (s/f), “Difusión de contratos y aparición de big players en el sector agropecuario argentino. Algunos casos”. Mimeo.
- Beltrán, Gastón (2007), *La acción empresarial en el contexto de las reformas estructurales de las décadas de los ochenta y noventa en Argentina*, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, tesis de doctorado en Ciencias Sociales.
- Boltanski, Luc y Eve Chiappello (2002), *El nuevo espíritu del capitalismo*, Madrid, Akal.
- Giarracca, Norma, Carla Gras y Pablo Barbeta (2005), “De colonos a sojeros. Imágenes de la estructura social del sur de Santa Fe”, en N. Giarracca y M. Teubal (comps.), *El campo argentino en la encrucijada. Estrategias y resistencias sociales, ecos en la ciudad*, Buenos Aires, Alianza.
- Gras, Carla (2009), “El nuevo empresariado agrario: sobre la construcción y dilemas de sus organizaciones”, en C. Gras y V. Hernández (comps.), *La Argentina Rural. De la agricultura familiar a los agronegocios*, Buenos Aires, Biblos.
- Gras, Carla y Valeria Hernández (2009), “El fenómeno sojero en perspectiva: dimensiones productivas, sociales y simbólicas de la globalización agrorural en la Argentina”, en C. Gras y V. Hernández (comps.), *La Argentina Rural. De la agricultura familiar a los agronegocios*, Buenos Aires, Biblos.
- Gras, Carla y Valeria Hernández (2008), “Modelo productivo y actores sociales en el agro argentino”, *Revista Mexicana de Sociología*, año 70, núm. 2, abril-junio.
- Habermas, Jürgen (1984), *Ciencia y técnica como ideología*, Buenos Aires, Editorial Tecnos.
- Hall, Peter A. (1997), “The Role of Interests, Institutions, and Ideas in the Comparative Political Economy of the Industrialized Nations”, en M. I. Lichbach y A. S. Zuckerman, *Comparative Politics: Rationality, Culture, and Structure*, Cambridge (Reino Unido), Cambridge University Press, pp. 174-205.
- Heredia, Mariana (2003), “Reformas estructurales y renovación de las elites económicas en la Argentina: estudio de los portavoces de la tierra y el capital”, *Revista Mexicana de Sociología*, año 65, núm. 1, México, enero-marzo.
- Hora, Roy (2009), *Los estancieros contra el Estado. La Liga Agraria y la formación del ruralismo político en la Argentina*, Buenos Aires, Siglo XXI.
- Hora, Roy (2005), *La burguesía terrateniente argentina, 1810-1945*, Buenos Aires, Claves para Todos, Capital Intelectual.
- Murmis, Miguel (1998), “Agro argentino: algunos problemas para su análisis”, en N. Giarracca y S. Cloquell (comps.), *Las agriculturas del Mercosur. El papel de los actores sociales*, Buenos Aires, Editorial La Colmena.
- Murmis, Miguel y Juan Carlos Portantiero (1971), *Estudios sobre los orígenes del peronismo*, Buenos Aires, Siglo XXI.
- Newell, Peter (2009), “Bio-Hegemony: The political economy of agricultural biotechnology in Argentina”, *Journal of Latin American Studies*, vol. 41, Cambridge University Press.

- Nun, José y Mario Lattuada (1991), *El gobierno de Alfonsín y las corporaciones agrarias*, Buenos Aires, Manantial.
- Obschatko, Edith (2003), *El aporte del sector agroalimentario al crecimiento económico argentino, 1965-2000*, Buenos Aires, IICA.
- O'Donnell, Guillermo (1977), "Estado y Alianzas en la Argentina, 1956-1976", *Desarrollo Económico*, vol. 16, núm. 64, Buenos Aires, enero-marzo.
- Offe, Claus (1988), "Atribución de estatus público a los grupos de interés. Observaciones sobre el caso de Alemania Occidental", en S. Berger (comp.), *La organización de los grupos de interés en Europa Occidental*, Madrid, Ministerio de Trabajo.
- Palomino, Mirta (1988), *Tradición y Poder: La Sociedad Rural Argentina (1955-1983)*, Buenos Aires, CISEA-GEAL.
- Pucciarelli, Alfredo (2002), *La democracia que tenemos. Declinación económica, decadencia social y degradación política en la Argentina actual*, Buenos Aires, Libros del Rojas-UBA.
- Robinson, William (2008), *Latin America and global capitalism. A critical globalization perspective*, Baltimore, The John Hopkins University Press.
- Sábato, Jorge (1988), *La clase dominante en la Argentina moderna*, Buenos Aires, CISEA.
- Schmitter, Philippe (1992), "¿Aún el siglo del corporativismo?", en P. Schmitter y G. Lehmbruch, *Neocorporativismo. Más allá del Estado y el Mercado*, Madrid, Alianza.
- Svampa, Maristella (2008), *Cambio de época. Movimientos sociales y poder político*, Buenos Aires, Siglo XXI.

Acerca de la autora

Carla Gras, socióloga y Doctora por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), y Profesora Asociada de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). Realiza estudios sobre estructura social agraria, el modelo de agronegocios y la expansión sojera, así como sobre el empresariado agrario y sus vínculos con la política y las disputas por los modelos de desarrollo y el papel de los recursos naturales. Dos de sus últimas publicaciones son "Changing patterns in family agriculture: the case of the Pampa Region, Argentina", *Journal of Agrarian Change*, vol. 9, núm. 3, julio, 2009 y *La Argentina rural. De la agricultura familiar a los agronegocios*, Buenos Aires, Biblos, 2009 (en coautoría con V. Hernández).

